

**INFORME DE COYUNTURA TRIMESTRAL
DUODÉCIMO INFORME, PERÍODO MAYO-DICIEMBRE 2006
TACEP N° 12, CHILE, DICIEMBRE 2006**

*Preparado por el Taller de Análisis de Coyuntura Económica y Política,
TACEP – Encuentro por la Convergencia*

**COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA NACIONAL E
INTERNACIONAL
PERIODO MAYO-DICIEMBRE 2006.**

Presentación

El presente informe estaba ya listo y por publicarse, cuando ocurrió la muerte de Pinochet. La forma como se construyó mediáticamente este hecho merece un análisis aparte y especial. El equipo del TACEP espera poder abocarse a esta tarea en los próximos meses. Sin embargo, hay que decir al menos dos palabras también ahora, a las inmediatas, a boca de jarro, como se dispara ante un peligro.

Porque el peligro está en la escenografía, casi wagneriana, con que los cómplices celebraron la partida de quien orquestó con bombas el acto inicial. Los ojos de todos se orientaban el martes 12 hacia el sarcófago envuelto en una bandera y adornado con banda presidencial, colocado sobre una cureña que rodaba tirada por seis caballos y escoltada por el caballo sin jinete que el difunto habría montado, entre el transfondo imponente de la Escuela Militar y las filas de cadetes que le rendían máximos honores militares...

Y los honores no fueron sólo militares. También los hubo religiosos. Más de una docena de curas habían representado – más que rezado - una misa y un responso, y los días anteriores hasta el Cardenal Arzobispo de Santiago se había impuesto el deber de contradecir la decisión del Gobierno y desarmarle su escenario, para devolverle al difunto – y sobre todo a sus cómplices que siguen vivos - la seguridad del pacto que tradicionalmente la cruz ha sellado con la espada.

Porque ese pacto estuvo desde el comienzo con él, aunque con la sordina de otro Cardenal, más digno que éste, quien por lo menos tuvo entonces el valor de armar un cerco de protección en torno a las víctimas inmediatas que la violencia de Estado se tomó para imponer el actual sistema económico y social excluyente. Tampoco le alcanzó para más a aquel dignatario eclesiástico. No pudo ver lo que nosotros ahora vemos: la complicidad de una clase de aprovechadores, la de quienes estuvieron también representados – y representando su papel - en esta misa de difuntos, porque no podían menos de reconocerle y agradecerle a este muerto el acrecentamiento de su propio poder y riqueza. Tampoco pudo ver aquel Cardenal que el golpe de entonces quedaría incrustado como enfermedad mortal irreparable, y por generaciones, en el seno de la sociedad chilena: la enfermedad de la exclusión de grandes mayorías, de la mentira

institucionalizada, de la injusticia hecha sistema y consagrada por más de un juez, de la denegación de derechos a los trabajadores, de la depredación de mares y cordilleras, de la insalubridad ambiental, de la falta de esperanza y de ganas o de empuje entre muchos de los jóvenes que ahora vemos deambular sin destino en nuestras poblaciones.

Esta es la herencia real dejada por el dictador – y no la de la parafernalia de la Escuela Militar. Denunciarla una vez más se hace necesario pues no faltan los incautos que suelen tragarse las mentiras que publicitó la clase dominante al enterrar al dictador como un héroe, más aún cuando la misma Concertación, dando continuidad al modelo económico y político institucional, ha legitimado la “obra” de Pinochet y la patronal.

TACEP, Santiago, 14 de diciembre de 2006

INDICE

I. LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE BACHELET. UN BREVE BALANCE CRÍTICO DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

1- Balance político-social.

- 1.1- La revolución de los pingüinos.
- 1.2- Las comisiones y la subcontratación.

2- Balance económico-social.

- 2.1- El aumento de diez por ciento de las pensiones mínimas.
- 2.2- Bachelet y Chile como potencia agroexportadora.
- 2.3- Bachelet y la “prometida” reforma previsional.
- 2.4- Mantención del IVA en 19%: se mantiene la injusticia.
- 2.5- Nuevas políticas para enfocar la pobreza.

3- Balance ecológico-social.

- 3.1- Aprobación del proyecto minero Pascua Lama: ¿Con quién está Bachelet?
- 3.2- El Caso CELCO: El papelón de las papeleras.
- 3.3- Endesa – Colbún colonizan la Patagonia.
- 3.4- Ministerio de Medioambiente. Más de lo mismo.

4.- Conclusión: Cultivando la explosión social.

II. APRONTES SOBRE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN CHILE

III. GOBERNANZA ALGO MÁS QUE UN TÉRMINO.

IV. PROBLEMÁTICA MAPUCHE

- Elementos externos
- Elementos internos
- Perspectivas

V. CRISIS ECOLÓGICA MUNDIAL –REPERCUSIONES Y PERSPECTIVAS PARA CHILE

VI. EFERVESCENCIA EN LOS ANDES: ENTRE LA REFUNDACIÓN DEMOCRÁTICA Y EL CONTINUISMO NEOLIBERAL

- La pelea por el carácter de la integración
- Los procesos de refundación democrática (Venezuela, Bolivia y Ecuador)
- Colombia y Perú: La carta de los populismos autoritarios

Apéndice: Las Grandes Empresas Transnacionales En la Globalización Neoliberal

I. LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE BACHELET. UN BREVE BALANCE CRÍTICO DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

En el TACEP N° 11, sosteníamos que la implementación de este modelo excluyente se ha sostenido y se sostendrá sobre dos ejes fundamentales: por un lado, el Estado seguirá desarrollando estrategias de contención de la pobreza, por la vía de una masiva distribución de planes sociales y de subsidios (a la contratación de jóvenes, a la asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas y movilizadas, etc., fuente por lo demás de robo de fondos para financiar campañas electorales y corrupción); por el otro, el Estado sigue reforzando el sistema represivo institucional a través del triple eje de la judicialización y de la criminalización del conflicto social (apuntando al control de las poblaciones pobres) y de la militarización policial por ahora – no solo del perímetro de La Moneda – sino de todo el territorio, principalmente el mapuche («amenaza terrorista, asociación delictuosa»), desde el primer día de gobierno del “nuevo Chile”. Veamos si estas tendencias se han mantenido

1- Balance político-social.

Según la agenda de los primeros 100 días de gobierno de Michelle Bachelet, tres ejes constituían la principal tarea política: la reforma de los sistemas previsional y electoral binominal, y la aprobación del proyecto de subcontratación. Sin embargo, a poco andar el gobierno debió afrontar el conflicto con los estudiantes secundarios, principal crisis política y social de estos nueve meses de gestión, reabriéndose nuevamente.

1.1- La revolución de los pingüinos.

Todo comenzó el 25 de abril de 2006, con una marcha para protestar por la demora en la entrega del pase escolar. Los estudiantes caminaron pacíficamente hacia el ministerio de Educación, pero antes de llegar fueron fuertemente repelidos por las Fuerzas Especiales. Era un tibio anuncio de lo que vendría, porque los secundarios sumaron otro reclamo: el excesivo precio de la Prueba de Selección Universitaria. Consideran discriminatorio este examen que determina el ingreso a la universidad. El concepto de desigualdad ya comenzaba a sonar en los oídos de los estudiantes. En el Mineduc, el ministro Zilic cuestionaba a los secundarios y esgrimía que “el gobierno no negocia bajo presiones”. Argucia argumentativa que fue devastada rápidamente por el movimiento estudiantil, que por primera vez en 16 años de transición logró golpear la estructura del poder. Anclada en las prácticas políticas de la Concertación, La Moneda ocupó los recursos retóricos para subestimar las manifestaciones y para satanizar a los estudiantes, reclamando por los destrozos y exigencias.

Pero 15 días después y frente a la pasividad política del gobierno, cerca de 2 mil estudiantes marcharon en Santiago y en regiones del país, para sumar a sus dos primeras demandas, dos más: revisión de la Jornada Escolar Completa y la derogación de la LOCE. Nuevamente, Carabineros en coordinación con la Intendencia Metropolitana y el ministerio del Interior reprimió la movilización y se registraron más de 900 detenidos.

El conflicto se agudizó y Zilic, casi desesperado y cansado frente a las protestas, anunció en respuesta a las demandas estudiantiles becas para la PSU a los dos quintiles más vulnerables. El 17 de mayo en otra marcha en Santiago, sin la autorización de la Intendencia, se registraron desmanes y detenidos, y otra vez en el discurso de gobierno remarcó los hechos de violencia y se negó a negociar bajo presiones. 48 horas después, los estudiantes radicalizan su postura y el Instituto

Nacional, el Confederación Suiza, el Liceo de Aplicación y José Victorino Lastarria son tomados por sus alumnos. Exigen que la Presidenta se refiera al conflicto estudiantil en el discurso del 21 de mayo en el Congreso Pleno.

La presidenta Bachelet, ante el Congreso Pleno omitió la movilización y sólo le dedicó algunas líneas de su discurso cuestionando a los encapuchados con el slogan de que “la democracia se ganó a cara descubierta” (cierto: dialogando con la dictadura desde el Plan Jarpa, abril de 1983). Astutamente, los estudiantes modificaron su movilización y se volcaron a sus colegios en paros reflexivos y tomas, demostrando que la verdadera democracia a cara descubierta es propiedad de ellos. El gran error de la Presidenta fue omitir el conflicto y satanizarlo una y otra vez. Al subestimar la representación y poder de los estudiantes, La Moneda sucumbió ante la estrategia clásica de la Concertación, es decir, no considerar la disidencia ni la movilización. Como la coalición de gobierno ha continuado la estrategia de despoltización de la ciudadanía ideada por la dictadura, el Ejecutivo proyectó que el movimiento de protesta sería rápidamente aplacado por la escasa cobertura mediática y por la apatía de la política tradicional. Sin embargo, los estudiantes remecieron la estructura del poder, porque sintonizaron con las aspiraciones mayoritarias de la sociedad, que vio en las demandas de los secundarios una protesta contra la desigualdad y la desesperanza tan anidada en la gran mayoría de los chilenos.

Después de 8 días de tomas y de tiras y aflojas con el gobierno, los estudiantes convocaron a un paro nacional. Lo que empezó con “no negociamos bajo presión” y que pasó a “no aceptamos los paros”, terminó con una convocatoria amplia para dialogar. Hasta tal extremo llegó la muestra de democracia real que los estudiantes dieron al país, que las vocerías eran revocables y nada se resolvía fuera de la asamblea. Absolutamente sobrepasado por la política estudiantil, el gobierno trató incansablemente de deslegitimar la protesta social y entregar una solución de parche. El paro nacional de los secundarios del 30 de mayo fue acompañado por algunas manifestaciones callejeras, que terminaron con la brutal intervención de Carabineros.

La movilización estudiantil sacudió al gobierno y en cadena nacional la Presidenta anunció las medidas para acabar con el conflicto. Lo cierto es que la mandataria apelando al lenguaje clásico de los economistas, simplemente comunicó que el aporte anual extra para la educación sería de 72.000 millones de pesos - 133 millones de dólares. Esto es una respuesta mezquina considerando las riquezas que Chile posee. Las autoridades abusan del lenguaje y ocupan espacios de ficción para comunicar sus medidas, pero esconden y manipulan la verdad.

Y, como punto final de estas medidas, Bachelet anunció la creación de un Consejo Asesor Presidencial, para hacernos creer que su gobierno escucha a la ciudadanía. La verdad es que no lo hace y quedó demostrado con la “revolución de los pingüinos”. Los estudiantes levantaron una demanda justa y razonable y en nuestro Mayo del 2006, los estudiantes pidieron solamente lo que es posible, puesto que en Chile existen los recursos suficientes para alcanzar una educación de calidad. No obstante, el movimiento recibió como respuesta la incapacidad del gobierno para hacer frente a este grave conflicto.

1.2- Las comisiones y la subcontratación.

Dos grandes temas político-sociales también fueron derivados a comisiones. Se trata de la reforma previsional y de la modificación del sistema electoral binominal. Dos anclajes más de la estructura neoliberal y antidemocrática que heredó la dictadura.

En la comisión previsional a cargo de Mario Marcel, ex director de Presupuesto durante el gobierno de Ricardo Lagos, hay una amplia representación de los centros de estudios íntimamente ligados al gran empresariado como el CEP y Libertad y Desarrollo y de la derecha política, todos los cuales siempre han respaldado el sistema de capitalización individual y, en consecuencia, sólo

podemos esperar modificaciones menores e insustanciales al sistema de las AFPs. Al convocar a estos representantes, la Concertación nuevamente echa por la borda la posibilidad de una modificación sustancial al actual sistema previsional. Los trabajadores quedaron sin representación y curiosamente dos reconocidos expertos, que ponían en tela de juicio la competencia de la industria y el poder oligopólico de las AFPs como Salvador Valdés y Manuel Riesco, quedaron excluidos, frustrándose además todo el esfuerzo del Juntos Podemos de “participar” a través de este último.

Si sólo un 30% de los puestos de trabajo en Chile son catalogados como “decentes”, si el 80% de los chilenos obtiene mensualmente menos de 350 mil pesos y si los empleadores no pagan las cotizaciones de sus trabajadores, porque la Inspección del Trabajo no puede fiscalizar, cualquier modificación al sistema de las AFPs no tendrá éxito. Se requiere de una cirugía mayor, que implique una reestructuración total del actual patrón de concentración de la riqueza que bien representan las AFPs.

Ese mismo esquema se mantendrá incólume con el anunciado proyecto de subcontratación que fue aprobado recientemente en el Congreso. Para poder anunciarlo en su discurso del 21 de mayo, Bachelet, a través del ministro del Trabajo Osvaldo Andrade, comprometió el veto presidencial para modificar los aspectos de la ley que no gustaban a la derecha.

Este proyecto es de suma importancia para atacar decididamente la precariedad laboral y la escandalosa situación de más de 500 mil chilenos que se ven sometidos a miserables condiciones de trabajo. El ex senador José Ruiz di Giorgio, calificó a la subcontratación como “la esclavitud moderna”. Coherentemente, la derecha se opuso a la ley, además de algunos parlamentarios democristianos. La Historia vuelve a repetirse. Por ello, el gobierno llegó a un acuerdo (¡¡otro más!!) con los senadores Allamand y Longueira, respectivamente, para asegurar los votos de la oposición al proyecto de ley. Una vez más, la Concertación ha consolidado la “demodura” y la “dictocracia”, donde la ciudadanía, los trabajadores y las aspiraciones de la mayoría de los chilenos son desplazados a un tercer y cuarto plano. Para el gobierno de Bachelet, más vale anunciar una ley insustancial el 21 de mayo que la real protección de los trabajadores.

Sobre la fascinación en los empresarios y el gobierno chilenos por la “flexiguridad” del modelo danés de mercado laboral, se hablará en párrafo aparte (ver II).

2- Balance económico-social.

2.1- El aumento de diez por ciento de las pensiones mínimas.

Una medida anunciada con grandilocuencia y amplia cobertura mediática, fue el aumento en un diez por ciento de las pensiones mínimas. Esta medida fue presentada como un gran esfuerzo y una muestra del compromiso social de la Concertación. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos esto no significó nada más que un paliativo menor despreciable. Nadie con menos de 150 mil pesos mensuales puede enfrentar sus gastos mensuales con un mínimo de dignidad y el aumento de las pensiones mínimas en 10 por ciento no permite a las personas llegar a ese nivel de ingreso.

2.2- Bachelet y Chile como potencia agroexportadora.

Según su programa de Gobierno, Michelle Bachelet intenta profundizar la actual estrategia de desarrollo, basada en la exportación de recursos naturales y en la entrega del excedente económico a los grupos económicos y a las transnacionales. La presidenta pretende constituir a Chile en una potencia agroexportadora a nivel mundial.

Hay una marcada tendencia hacia el fortalecimiento de las actividades económicas intensivas en recursos naturales como la agroindustria y la salmonicultura, además de la búsqueda de nuevos TLCs para abrir aún más nuestra economía a los mercados internacionales.

Frente a esta estrategia de desarrollo, la reforma a la actual institucionalidad ambiental a través de un nuevo Ministerio del Medio Ambiente y de una Superintendencia Ambiental tendrá pocos efectos en la defensa de nuestro patrimonio ambiental, ya que no está en la lógica de las futuras autoridades la sustentabilidad como ente rector del desarrollo económico del país. De hecho no se contempla en la agenda oficial la aplicación de royalties a las actividades extractivas de RR.NN.

2.3- Bachelet y la “prometida” reforma previsional.

Hoy, el 50% de los afiliados a las AFPs recibirían una jubilación menor a la asistencial, que bordea los 40 mil pesos mensuales. Por lo tanto, el Estado se verá en la obligación de surtir de subsidios a los millones de chilenos que han entregado parte de sus sueldos a un sistema de administración que ha lucrado sin parar desde 1981. Las AFPs se han convertido en uno de los sectores económicos más dinámicos con una rentabilidad del 25% anual. Esas enormes ganancias se explican por los elevados cobros de administración pagados por los cotizantes, que superan el 13%, y por la escasa competencia que existe en este sistema.

Es muy difícil que en ese contexto se logren avances importantes para los trabajadores, y menos aún será posible una reforma importante del sistema de capitalización individual, a fin de que la gran mayoría de los trabajadores se encuentre protegido en el período de retiro.

2.4- Mantención del IVA en 19%: se mantiene la injusticia.

A las pocas semanas de haber asumido Bachelet fuimos sorprendidos por la decisión del ministro Andrés Velasco de mantener la tasa del IVA en 19%, argumentando que esto es necesario para financiar el programa social de Bachelet, en especial lo referido a las mejoras en las pensiones mínimas. Esta decisión deja al descubierto, nuevamente, la nula voluntad por parte de la Concertación de hacerse cargo de la desigualdad en nuestro país, la que se encuentra amparada fundamentalmente en nuestra injusta estructura tributaria.

Hoy en día la recaudación fiscal recae principalmente en los impuestos indirectos, que gravan al consumo, siendo el más importante el IVA que explica casi el 50% de toda la recaudación. Este impuesto grava mucho más fuerte en términos relativos a aquellos grupos que destinan la mayor cantidad de su ingreso al consumo, es decir, a los más pobres. Por otro lado, el impuesto a la renta de las empresas (1ª categoría) sólo aporta con el 17% de la recaudación. En otras palabras los más pobres de este país terminan financiando al aparato estatal, o lo que es peor los pobres se financian a sí mismos. Y como los pobres son pobres, pobre es la educación, la salud y la vivienda social que se pueden proveer a sí mismos.

2.5- Nuevas políticas para enfocar la pobreza.

El Gobierno, a través de la ministra de Mideplan Clarissa Hardy, anunció la renovación de la antigua Ficha CAS (determinada y hecha en dictadura por Odeplan, en la época del subdirector Miguel Kast, Chicago Boy tan venerado como Jaime Guzmán) por la nueva Ficha de Protección Social. Después de 16 años, se trata de avanzar en la reformulación de una herramienta heredada de la dictadura para “medir y reducir” la pobreza y la indigencia.

La nueva Ficha de Protección Social intenta visualizar “todas” las dimensiones de la pobreza, especialmente en lo que se refiere a la vulnerabilidad: enfermedades crónicas e invalidantes, pertenencia a pueblos originarios, calidad de los empleos, considerando, además, las diferencias regionales y la educación, variables relevantes que permiten caracterizar la capacidad generadora de ingresos. La antigua Ficha CAS en cambio, se enfocaba demasiado en la tenencia de ciertos bienes (refrigerador, lavadores, etc.), consideraba la educación como un elemento aislado y carecía de un enfoque regional: típico enfoque neoliberal

Aún queda pendiente sincerar las cifras de pobreza en nuestro país, producto de una forma metodológica que subestima sistemáticamente el número de pobres. A través de una línea de pobreza que recoge dos veces el valor de una canasta básica de alimentos, y que alcanza un valor de 43.712 pesos, no se da cuenta de la real dimensión de la pobreza en nuestro país. Si se considera una cifra en base a las necesidades básicas, de 131 mil pesos por persona al mes, el porcentaje de personas que no logra cubrir adecuadamente sus necesidades en la sociedad moderna y compleja de hoy, ascendería a más del 70% de la población. Por lo tanto, llegó la hora de sincerarnos como sociedad y establecer nuevos estándares para medir la pobreza, la indigencia y las “personas en situación de calle” en nuestro país (último invento para desarrollar programas de “protección social”).

3- Balance ecológico-social.

Michelle Bachelet menciona al medioambiente como uno de los ejes principales de su gestión de gobierno, con la creación del ministerio del ramo como punta de lanza. Sin embargo, durante los primeros nueve meses de su administración, una serie de acontecimientos hicieron que la promesa hecha ante todo el país, en orden a que “ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medioambiente”, haya terminado siendo nada más que letra muerta.

3.1- Aprobación del proyecto minero Pascua Lama: ¿Con quién está Bachelet?

“Estoy contigo”, rezaba el slogan de campaña de la actual presidenta, frase que se transformó en una broma cruel (No “Estoy ni ahí contigo”, es el verdadero slogan) para los miles de habitantes del valle del Huasco que, el pasado 13 de junio, vieron cómo la CONAMA, aprobaba el proyecto de la compañía minera Canadiense Barrick Gold en la zona de los glaciares andinos de la Tercera Región. El proyecto fue tenazmente resistido por la comunidad de Vallenar, de Alto del Carmen y diversas localidades de esa zona, con una arraigada tradición agrícola y un promisorio desarrollo turístico, actividades que se ven amenazadas por el daño que provocará la extracción del oro que se encuentra en el subsuelo andino.

La aprobación del proyecto es la última de una serie de decisiones de los gobiernos de la Concertación que estuvieron desde el principio a favor de Barrick: por eso se firmó en el gobierno de Frei un protocolo específico para Pascua Lama y adicional al Tratado Minero Chileno - Argentino; por eso Lagos permitió la presentación de un plan de manejo de glaciares durante su gobierno e hizo la vista gorda a una serie de irregularidades del proyecto, como la firma de un acuerdo externo entre la empresa y una parte de los afectados, por 60 millones de dólares siempre y cuando no hicieran objeciones a la propuesta.

La explotación de Pascua Lama implica para el caso chileno un serio riesgo de contaminación de los tres glaciares que surten los cursos de agua del valle, donde se desarrolla una importante actividad agrícola. Además, un proyecto con fecha de término como éste no representa ninguna oportunidad real de desarrollo, tal como lo han querido plantear las autoridades de

Gobierno. Por otra parte, se están poniendo en peligro más de 8 mil empleos agrícolas y la salud de personas que costará enormes cantidades de dinero, además del sufrimiento corporal y moral que muchas enfermedades asociadas al desarrollo minero traen.

3.2- El Caso CELCO: El papelón de las papeleras.

El desastre del Río Cruces, con miles de cisnes valdivianos muertos en su superficie, se transformó en el icono del mal manejo ambiental del Gobierno anterior. No ha habido recuperación alguna del santuario durante el actual gobierno, y ninguno de los compromisos, públicos y privados, en orden a reparar el daño y restituir este nicho ecológico único en el mundo, se ha cumplido. Pese a la responsabilidad de la planta de celulosa, propiedad del consorcio de Anacleto Angelini, el Gobierno no ha cursado ninguna sanción en contra de la empresa. Muy por el contrario, el Ejecutivo no tardó en autorizar una nueva planta de Celulosa, esta vez en el río Itata, al norte de la Octava Región. El Complejo Industrial y Forestal Nueva Aldea, también propiedad de Angelini, obtuvo su aprobación pese a tener graves errores en la presentación del proyecto.

Evidentemente, lo esperable era la revocación inmediata de los permisos de funcionamiento, hasta que los gruesos abusos por sobre las ya permisivas condiciones de operación, fueran corregidos. Esto al menos pensó la Corte de Apelaciones de Valdivia, decisión que fue finalmente revocada por la Corte Suprema, mediante la presentación de un estudio abiertamente adulterado, tal como han reconocido los propios ejecutivos de la firma, en lo que llamaron “un error”.

Pese a que se demostró hasta la saciedad el impacto de los desechos industriales de la producción de celulosa¹, actualmente se proyecta un ducto al mar, para descargar en el océano exactamente los mismos riles que destruyeron el santuario Carlos Andwanter del río Cruces.

El ducto submarino está proyectado para desembocar a la altura de Mehuín, donde los pescadores artesanales de la zona han presentado una tenaz y unánime resistencia (incluso enfrentándose con la Armada que protegía a los “consultores” de los “estudios” del ducto), la misma que mostraron años atrás cuando se proyectaba recién instalar una planta de celulosa. Ellos temen, y con razón, que la descarga de riles en el mar virtualmente aniquile su fuente laboral, y los hunda aún más en la precaria situación que vive la pesca artesanal en Chile que los tiene en la pobreza e indigencia.

3.3- Endesa – Colbún colonizan la Patagonia.

Desde que la firma española Endesa y Colbún (los Matte) anunciaron, el año pasado, su propuesta de construir cuatro enormes represas sobre los ríos Baker y Pascua se encontró con la oposición de aquellas comunidades que nuevamente ven amenazado su patrimonio natural y su fuente laboral, alzando la voz para protestar, especialmente tras el desenfadado respaldo que las máximas autoridades de gobierno dieron al proyecto, como el ex ministro Rodríguez Grossi y la actual ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso.

Este proyecto inundará miles de hectáreas, y buena parte de ellas corresponde a bienes nacionales de uso público, como ríos, lagos y predios fiscales. Endesa, en contrapartida, ha pretendido reconocer como legítimas sólo las oposiciones de los colonos cuyos terrenos serán

¹ El estudio de la Universidad Austral encargado por la CONAMA establece que la empresa sobrepasó reiteradamente los límites máximos de contaminantes cloratos, ácidos resinicos, sodio, y las temperaturas de los residuos descargados al río Cruces lo que afectó sus sedimentos, desapareciendo la vegetación de la que se alimentaban cisnes, taguas y otras especies.

eventualmente inundados, descalificando a todas las demás. Endesa actúa con la prepotencia propia de una enorme transnacional, y lleva adelante, sin pausa y sin prisa, una agenda no declarada, frente no sólo a la indiferencia, sino con el entusiasta apoyo de la administración Bachelet (la construcción por el MOP de la futura Carretera Austral contigua a las líneas de transmisión de Transelec es una clara muestra). Sólo queda esperar que una comunidad valerosa como la de esa zona, que logró detener otra aberración ambiental como el proyecto Alumysa, sea nuevamente capaz de lograr la protección que debiera obtener del gobierno que le dijo “estoy contigo”.

3.4- Ministerio de Medioambiente. Más de lo mismo.

Una de las principales promesas de la Presidenta Bachelet en materia ambiental, y que se ratificó en su discurso del 21 de mayo, es la creación del Ministerio del Medio Ambiente. En este sentido se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el cargo de Presidente de la CONAMA y le confiere el rango de Ministro de Estado. Sin embargo, este proyecto, así como algunas precisiones de fondo a la intención del Gobierno en materia ambiental, plantean una serie de dudas acerca de la real eficacia de esta reforma institucional.

Cabe la duda acerca de la capacidad que tenga el gobierno de enfrentar dos desafíos simultáneos. Por un lado, la creación del ministerio con todas las tareas administrativas y constitucionales, a cargo de la figura de Presidente de la CONAMA, y por otro lado, seguir velando por la protección ambiental y de las comunidades de tal forma de ir cumpliendo las recomendaciones que el Informe de la OCDE fijó para Chile en materia ambiental. El desafío se agudiza al constatar que el proyecto de Ley no contempla nuevos recursos financieros para la CONAMA. Tampoco se contemplan, o por lo menos no quedan claras, las verdaderas atribuciones políticas de la presidencia de la CONAMA, salvo su papel coordinador. Por lo tanto un presidente de la CONAMA que carezca de la capacidad para influir políticamente, es sólo un arreglo cosmético para continuar con el estado de devastación ambiental.

De lo bueno podemos destacar el retiro del Proyecto de Ley Larga de Pesca, que es una lápida para los menguados recursos pesqueros chilenos y para los 60 mil pescadores artesanales que subsisten al borde de la indigencia a lo largo del litoral. Otra señal positiva son las sanciones iniciadas contra algunas plantas de salmonicultura que fueron sorprendidas produciendo más de lo permitido. Nada se ha hecho por subsanar una serie de irregularidades al interior de la industria salmonera en su conjunto, donde miles de obreros trabajan diariamente en condiciones precarias y con bajos sueldos, vulnerando sus derechos laborales, sin mencionar los graves y diversos impactos medioambientales que tiene esta actividad, como la fuga masiva de salmones, el uso de antibióticos que afectan la salud humana, la aplicación de fungicidas prohibidos en los países desarrollados, la degradación del fondo marino y el fomento a la aparición de mareas rojas, por nombrar sólo algunas.

Si a todas estas realidades detalladas anteriormente, se suman otras arrastradas de las desastrosas administraciones anteriores, como la reducción de la biomasa de las principales pesquerías, una pésima Ley de Bosque Nativo a punto de aprobarse en el Senado, la tala ilegal de alerce, el caso de La Farfana y el sometimiento a la hediondez permanente de Pudahuel y Maipú, la desafectación de suelos agrícolas y la expansión urbana hacia las zonas de interés silvoagropecuarias en Santiago, la exposición permanente de trabajadoras temporeras a pesticidas altamente tóxicos, etcétera, parece evidente el profundo desprecio que tienen por la problemática del medioambiente, los empresarios, la derecha, la Concertación y sus gobiernos, con su concepción ultra productivista y favorable a los grupos económicos.

Pero lo más grave es la profundización de un patrón de acumulación que consiste en la conversión acelerada de capital natural en capital financiero concentrado en corporaciones y grupos

económicos que operan precisamente en los sectores que explotan intensamente el medio ambiente y sus recursos como denunció el Informe País Estado del Medio Ambiente en Chile 2006, Geo Chile, U.CH.

4.- Conclusión: Cultivando la explosión social.

Este panorama para nada alentador que nos dejan tras de sí los primeros nueve meses del gobierno de Bachelet viene a completar un cuadro desolador después de 16 años de aplicación de políticas económicas ortodoxas por parte de los gobiernos de la Concertación.

Los estudiantes secundarios con su retiro del Consejo Asesor Presidencial vuelven a ocupar la agenda política y las pautas de los medios de comunicación y vuelven a romper con la apatía, a remecer la estructura del poder y exigen acabar con la pésima enseñanza que reciben.

Sus futuras movilizaciones reinstalarán una gran demanda social, porque la desigualdad, la exclusión y la desesperanza es transversal en nuestro país. La “revolución de los pingüinos”, es simplemente la primera gran manifestación del malestar, agravio y exasperación que se incubaba en la sociedad chilena.

Los estudiantes pudieron manifestarse porque quieren y tienen mucho que ganar y poco que perder. Ciertamente, es difícil que se materialicen brotes de insatisfacción social que logren romper con la actual estructura política y económica del país, pero no es descabellado pensar que existen razones de sobra para que muchos chilenos se levanten en protesta frente a la precaria situación en la que viven.

Hoy en base a una estimación sensata de la pobreza, más de un 80% de los chilenos se las arregla más o menos, mal o muy mal para vivir en una sociedad moderna y compleja como la nuestra.

La consecuencia del modelo implantado en Chile ha provocado que nuestro país sea una de las sociedades más desiguales del planeta. Tomando en cuenta sólo la distribución de los ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre, tenemos que los primeros reciben 18,3 veces más ingresos que los últimos. Como lo informa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la clase media chilena recibe una de las peores distribuciones de ingreso del mundo (un poco más del 30%), que nos llevan a dudar seriamente acerca de la existencia hoy en día de este grupo social, por lo menos de la manera como lo conocimos hace un tiempo atrás.

A nuestro juicio, actualmente existe en Chile además, una doble condición de la injusticia, la que no sólo se traduce en una mal distribuida riqueza o producción de bienes (zapatos, alimentos, libros, automóviles, etcétera), sino también en la desigual distribución de los males del progreso (basuras, contaminación tóxica, depredación de ambientes naturales, enfermedades psicológicas, etcétera). Además, las extensas jornadas laborales de más de 10 horas diarias, el millón de chilenos que recibe 130 mil pesos al mes y los elevados porcentajes de pobreza e indigencia, pueden ser causa suficiente de un gran estallido social. Es una realidad que simplemente los empresarios, la derecha, la Concertación y sus gobiernos no quieren mirar.

II. APRONTES SOBRE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN CHILE

Lo que se busca cada vez que se habla de flexibilizar el mercado y las relaciones laborales, es eliminar y cambiar sustancialmente las leyes y regulaciones que consagran la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, para dejarlas expuestas a las exigencias del mercado.

Se obtiene este objetivo en cuatro tiempos: 1) eliminando el salario mínimo, ajustado en teoría al costo de la vida, y determinando su monto según la productividad de cada empresa y/o por

la oferta y demanda de mano de obra existente en el mercado de trabajo; 2) contratando personal temporal de corta duración, absuelto de cargas sociales o cualquier costo salarial extra; 3) disponiendo de trabajadores polifuncionales que realicen distintas tareas y funciones y subcontratando a otra empresa externa (tercerización); y 4) variando los tiempos totales de trabajo, para redistribuirlos según conveniencia empresarial, de forma mensual o anual.

La Central Unitaria de Trabajadores CUT, a través de una carta abierta rechazó las intenciones de “importar” el modelo danés, argumentando que entre Dinamarca y Chile existen grandes diferencias por lo que no se puede aplicar mecánicamente el modelo. Además, según la CUT, para copiar dicho esquema laboral, el Estado chileno debería en primer lugar, garantizar la salud, la educación de calidad y la protección social gratuitamente a todos los chilenos.

Por su parte, la Central Autónoma de Trabajadores, CAT, emitió un comunicado en donde desafía al ministro Velasco a “importar el modelo danés completo a nuestro país”. Esto incluiría, según esta organización, “que la seguridad social esté a cargo del Estado y de las empresas, un pago del 100 por ciento de la remuneración al trabajadores mientras dure su cesantía”.

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC, liderada, todavía, por Hernán Sommerville) se pronunció totalmente a su favor. Es decir, la Confederación que reúne a todo y el gran empresariado chileno, no sólo está feliz sino que considera de primera importancia que el gobierno introduzca cambios a la ley laboral que permitan que las relaciones entre empresarios y trabajadores se flexibilicen, para aumentar el crecimiento económico del país. Es más, dirigentes de la CPC manifestaron a la prensa, su conformidad con el viaje que hizo el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, a Dinamarca con el fin de interiorizarse más a fondo y conocer en terreno el modelo de “flexiguridad” existente en ese país.

Flexibilidad laboral implica generar políticas que favorecen las necesidades empresariales con el fin de obtener más trabajo por menos costos. Se trata, finalmente, de dar más libertad al empresariado para que pueda emplear y despedir al trabajador de acuerdo a sus necesidades productivas. Con esto no se obtiene más empleo, sino que una mayor inestabilidad laboral: lo que quedaba de estabilidad laboral se esfuma casi por completo. Aumenta la oferta de trabajos con salarios aún más bajos y variables de los ya existentes. Los trabajadores y trabajadoras pueden ser contratados cuando la empresa lo necesite y despedidos, también, cuando ésta lo necesite.

Se está estudiando el término de las indemnizaciones por años de servicio, que ya fue reducido en tiempos de la dictadura militar a un máximo de 5 años y, luego, fue aumentada a un máximo de 11 años con los gobiernos de la Concertación. Entendemos, con la flexibilidad laboral, que si los empleadores pueden contratar y despedir trabajadores cuando quieran y como quieran, las indemnizaciones “ya no serán necesarias”.

Debemos señalar que el modelo Danés de “flexiguridad” tiene como principales características una ley fuerte en seguridad social, lo que se traduce, en términos gruesos, en una política estatal en que se subsidia la salud, vivienda, educación y un consistente subsidio de cesantía por un máximo de 4 años que recibe cada trabajador que pierde su empleo; si bien no se pagan indemnizaciones, las personas que quedan sin trabajo pueden sobrevivir, hasta encontrar un nuevo empleo, gracias a este subsidio de desempleo que corresponde al 80% de los ingresos antes percibidos. Además, respaldados por una política obligatoria de reinserción laboral.

Otros puntos que deben ser tomados en cuenta, que diferencia el modelo de sociedad entre Chile y Dinamarca son:

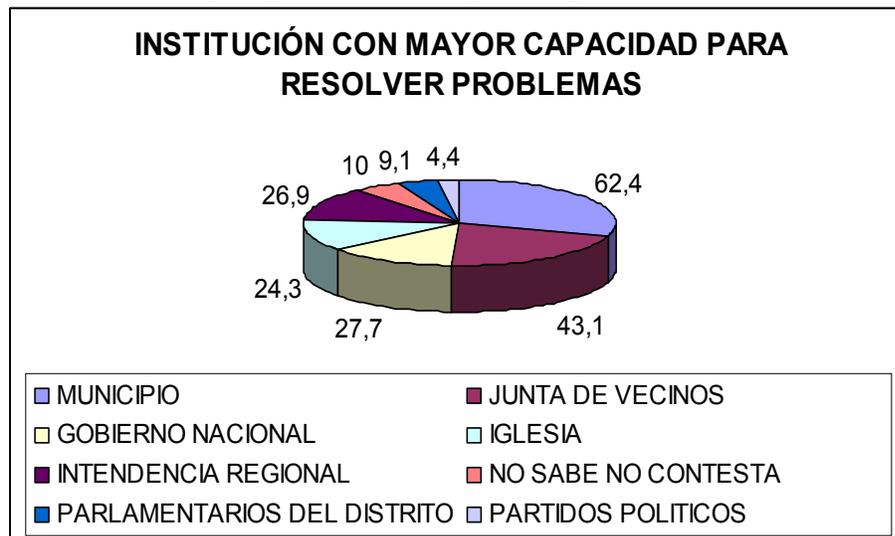
- Los trabajadores daneses tienen una jornada de 37 horas semanales y entre 5 a 6 semanas de vacaciones al año. En cambio en Chile, se trabajan 45 horas a la semana legalmente y se otorgan 3 semanas de vacaciones para quienes tienen contrato indefinido.

- En Dinamarca, se le da gran importancia a la capacitación y la certificación de competencias laborales. En Chile, el 75% de la fuerza laboral no ha completado la Enseñanza Media y sólo el 10% ha recibido capacitación.
- El Seguro de Cesantía danés tiene una tasa de reemplazo de cerca del 80% de la renta del trabajador y dura hasta 4 años, con amplias políticas de reinserción laboral financiadas por el Estado. En el caso chileno, el Seguro de Cesantía tiene baja cobertura y apenas alcanza a cubrir necesidades mínimas por un corto tiempo.
- En el país Danés, cerca del 80% de los trabajadores están sindicalizados y realizan negociación colectiva sectorial, en cambio en Chile, la tasa de sindicalización lamentablemente apenas supera el 11% y la negociación colectiva está fuertemente restringida, por lo que no supera el 8%.

III. GOBERNANZA ALGO MÁS QUE UN TÉRMINO.

El término inglés *governance*, que se traduce por “gobernanza”, no es lo mismo que gobierno, pues se refiere a la relación entre la sociedad civil y el Estado, entre los mandatarios y los mandados, el gobierno y los gobernados, acentuando la idea de credibilidad, tanto de los políticos como de las instituciones de gobierno. Las vías hacia una mejor credibilidad y legitimación del gobierno pasan por una administración que se responsabiliza y da cuenta de sus actos ante la ciudadanía, y se caracteriza por la transparencia, la receptividad, la verdadera participación, la construcción de poder en agrupaciones de la sociedad civil y la consulta pública.

Más allá de las teorías sobre “gobernanza”, interesa saber lo que la gente percibe respecto a ella en las diversas instancias de gobierno, y en particular en las municipalidades. Para ello, analizaremos los resultados de una encuesta del Centro de Estudios Públicos CEP realizado el segundo semestre del año 1995 que aparecen en el siguiente gráfico

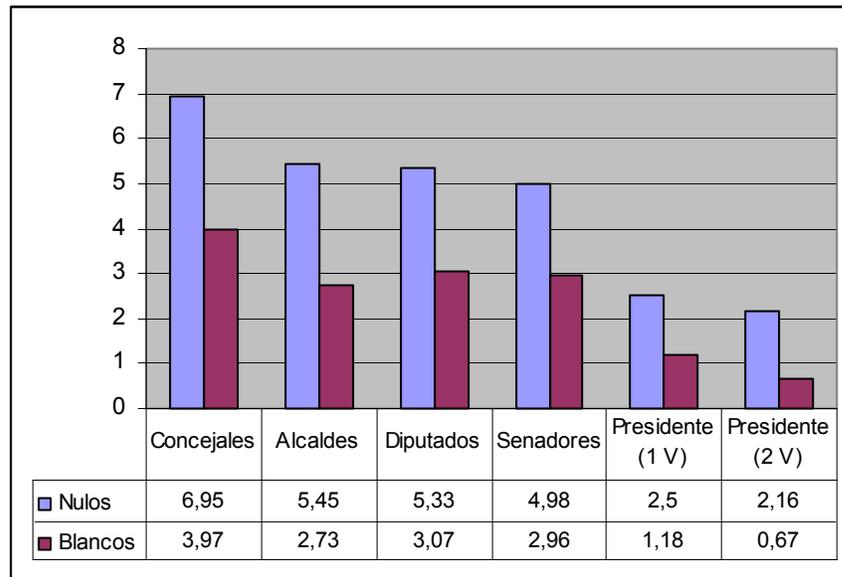


Tal como se puede apreciar en el gráfico, más de un 60 por ciento de las opiniones recogidas manifestó que el municipio es la institución que tiene mayor capacidad para resolver los problemas locales. En segundo lugar aparece la Junta de Vecinos con 43 por ciento; en tercer lugar, en empate, aparecen el gobierno nacional conjuntamente con la Iglesia. Con menores preferencias relativas aparecen la Intendencia Regional, los parlamentarios del distrito y los partidos políticos. Estos

antecedentes reflejan que el municipio es efectivamente percibido como una instancia de resolución de problemas, con mayor gravitación que las juntas de vecinos, el Gobierno nacional, la Iglesia, los parlamentarios del distrito y otras instituciones.

Lo anterior significa que a pesar de la reducida importancia presupuestaria que tiene el sector municipal en el contexto del sector público como un todo, sin embargo, por el tipo de servicios que otorga y la cercanía a sus usuarios, tiene gran gravitación en el quehacer político y social del país.

Pero analizando los resultados de las anteriores elecciones municipales del año 2004, y comparándolos con los resultados de las elecciones parlamentarias 2005 y presidenciales recientes del año 2005 para la primera vuelta y el 2006 para la segunda vuelta, podemos ver los siguientes resultados:



Nuestro supuesto es que los votos nulos y blancos significan sobre todo un castigo a la institución, aunque no negamos que hay otras variables que también inciden en tal comportamiento electoral. En este gráfico podemos observar que la mayor cantidad de votos nulos y blancos se concentran en los concejales, luego en el alcalde, después en los parlamentarios y en último término en la votación presidencial. Si nuestro supuesto es correcto, esta votación estaría señalando un mayor descontento hacia la administración local del municipio.

En consecuencia, habría una disparidad entre lo que el 62,4% de la gente cree sobre la posibilidad que tiene la institución municipal para resolver las distintas problemáticas, por un lado, y la sanción que la gente le da al municipio por no ser capaz de resolver sus problemas de manera asistencial con mayor rapidez y efectividad.

Por ello, la gestión de los municipios como administradores tiende al ser mal evaluada, no obstante considerar que el municipio como institución debería ser el encargado de gobernar y dar una solución a las problemáticas. La gestión de los municipios y/o gobiernos locales se realiza en un escenario en el que aparecen los siguientes elementos: territorio, población, organización comunitaria, capacidad económica y autoridad. La autoridad está en manos del gobierno local ubicado en la municipalidad. Las principales herramientas de evaluación municipal las constituyen el Diagnóstico del municipio y el Presupuesto Municipal, como principal instrumento en el área de

las Finanzas Municipales. Pero la autoridad de gobierno municipal parece no generar “gobernanza”, esto es, mayor participación o acercamiento de la gente.

IV. PROBLEMÁTICA MAPUCHE

Los conflictos entre el Pueblo Mapuche y las empresas mineras reeditan en la actualidad los que el pueblo mapuche ha tenido históricamente, desde la época española y durante toda la existencia del Estado chileno. A la actitud decidida de los mapuches, responde ahora el Estado enviando fuerzas policiales para proteger a las empresas. La situación actual es otro episodio más en la secuencia del proceso desatado por el Estado Chileno hace más de un siglo. En esta secuencia hay que mencionar la invasión del territorio mapuche, la imposición de reducciones, la división de las comunidades y la venta de las tierras, y agregar que las leyes indígenas no reconocen la existencia del pueblo mapuche.

En la desestructuración actual del pueblo mapuche influyen elementos externos e internos. Entre los primeros, están los proyectos o megaproyectos, tanto forestales como energéticos, que condicionan al pueblo mapuche. Entre los elementos internos, están los conflictos entre comunidades y su propia visión del uso y dominio de la tierra.

Elementos externos

Las demandas del pueblo mapuche son reivindicaciones históricas al Estado chileno: ser reconocido como pueblo originario dotado de su correspondiente autonomía. La constante degradación social, económica y ambiental que viven las comunidades y sus tierras ha puesto urgencia a la búsqueda de soluciones.

Frente al aumento y fuerza que han cobrado las movilizaciones de los mapuches, la actitud de las autoridades políticas ha consistido en el uso de la represión, echando mano de forma desmedida de las fuerzas policiales y apoyando las exigencias de las empresas. Pero las autoridades ha intentado principalmente ocultar y deformar este nuevo movimiento reivindicativo, generando un escenario apropiado para el despliegue de una estrategia política y represiva que les permita desarticular a las comunidades más activas.

El gobierno ha insistido en eludir su responsabilidad al dar a entender que los conflictos son particulares entre comunidades y empresas. Y en esta situación, su papel ha sido mantener el orden político destinando un amplio contingente policial. Bajo esta alegación formal, lo que finalmente ha hecho ha sido proteger los bienes y actividades de las empresas.

Además, el gobierno no reconoce ni que los conflictos se hayan agudizado, ni que los mapuches deben ser considerados como nuevos interlocutores a carta cabal. Al contrario, legitima el actual modelo económico y con ello el desarrollo forestal y energético, base de los actuales conflictos. Para el gobierno los conflictos que surjan de este desarrollo deben resolverse sin entorpecer los proyectos. Y resolver estos problemas debería ser una función principal de la gestión de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo que desde hace tiempo ya no cuenta con legitimidad ante los mapuches, por su papel en el conflicto Ralco.

La fórmula gubernamental es por todos sabida y consiste en generar mesas de diálogo y consensos entre las partes en conflicto. Pero esta fórmula ya no convence a los mapuches, porque si bien en el terreno el conflicto es con las empresas, en el fondo es con el Estado chileno, ya que es éste el que debe devolver las tierras y reconocer el pueblo mapuche.

Las empresas forestales dicen no ser causantes de la situación actual y que corresponde al Estado dar una solución. Ello significa que los mapuche deben o bien integrarse al actual modelo neoliberal, o bien ser reprimidos, con el fin de resguardar la inversión y la propiedad privada.

Se han presentado muchas denuncias en las zonas de conflicto, donde el gobierno ha dispuesto un mayor control policial. Esto lo vemos reflejado en primer lugar, en el aumento de la dotación policial. Se han enviado Fuerzas Especiales de Carabineros y grupos que trabajan en inteligencia política, en los cuales se ha identificado personal de la Policía de Investigaciones, Fuera de ello, se han instalado controles carreteros y vigilancia de las comunidades.

Las comunidades y sus actuales dirigentes, no pretenden retractar la denuncia de su situación social y de la discriminación actual en la sociedad chilena. Ellos no quieren detenerse hasta lograr la detención de los mega proyectos que atentan contra su supervivencia económica y cultural y la recuperación de sus tierras.

Internos

Más allá, de los conflictos que se originan entre los mapuches y el Estado, también debemos decir los distintos conflictos internos que se han provocado, como la percepción que tienen ahora de la tierra, en cuanto, la mayoría de las tierras compradas por la CONADI ha sido entregada de forma comunitaria. El problema viene de que no existe un mecanismo de repartición de las tierras de uso y tampoco de distribución de las pérdidas y utilidades económicas entre los miembros de las comunidades.

De aquí se originan diversos conflictos internos, como por ejemplo el de la comunidad de Cauñicu en la Octava región, en donde la comunidad tuvo que enfrentar un conflicto interno. El problema se origina en no saber cómo distribuir la tierra, ni quién se hacía cargo de ella. El lonko Huenupe, en este caso, tomó posesión individual de las tierras entregadas por la CONADI y se las apropió para su familia. Como consecuencia de esto, en julio de 2002 un grupo de pehuenches de la comunidad mapuche de Cauñicu, ubicada en el Valle del Queuco, sector Alto Bío-Bío, dio muerte a Agustina Huenupe Pavian y Francisco Huenupe Pavian en su propia casa, utilizando para ello armas de fuego y elementos contundentes, dejando además una docena de lesionados, entre hombres, mujeres y niños.

La constante degradación social, económica y ambiental que viven las comunidades y sus tierras, ha puesto urgencia a la búsqueda de soluciones.

Perspectivas

En la actualidad, se dispone de cuatro perspectivas chilenas para el abordaje de la problemática indígena.

1.- La recogida en el Informe y Recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, del gobierno de Chile, presentado el año 2003, la cual fue encargada por Ricardo Lagos y presidida por Patricio Aylwin. Este informe hace la recomendación del reconocimiento de los derechos territoriales indígenas y el fin del Fondo de Tierras, para terminar con las reclamaciones por la vía de una Comisión de Reparación, que atenderá sólo los casos de tierras usurpadas de Títulos de Merced. Además, cabe recalcar que los resultados emitidos por esta comisión tienen tal grado de ambigüedad que no pueden dar una solución. En el prólogo de un libro de José Bengoa, *La Comunidad Reclamada*, de 2005, la ahora presidenta Michelle Bachelet señala: “el fracaso de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato ha debilitado aún mas la institucionalidad interétnica en Chile. No hay, ni para hablar de mecanismos válidos de medición”.

Por lo tanto, no hay una política clara para dar solución definitiva al conflicto de las tierras para el pueblo mapuche.

2.- La propuesta del Instituto Libertad y Desarrollo o de la derecha neoliberal, Sus análisis fueron evolucionando desde incipientes críticas respecto a la gestión de CONADI y del gobierno frente a los conflictos de tierras, donde rechazan la propia existencia de políticas indígenas, hasta llegar al año 2003 con una completa e inédita re-elaboración conceptual del pensamiento conservador neoliberal chileno. Esta institución sugiere que los recursos destinados a la compra de tierras, sean reorientados hacia el desarrollo social, coincidiendo con la corriente más conservadora del indigenismo tradicional chileno.

3.- Además, están las doctrinas jurídicas penales desarrolladas y aplicadas en el procesamiento a dirigentes y comuneros mapuches, que a través de diversas normativas criminalizan y sancionan duramente las reclamaciones territoriales, sin garantizar el debido proceso ni juicio justo a dirigentes y representantes indígenas, como lo han denunciado organizaciones indígenas, de derechos humanos y observadores internacionales.

4.- La posición del Pueblo Mapuche, es sumamente variada, puesto que hay distintas voces, - instituciones u organizaciones y representaciones - que participan en la toma de decisiones. La CONADI ha tenido parte en que surja un gran conflicto de gobernabilidad, pues los mapuche consideran que esta institución es lejana a sus requerimientos. Se originan conflictos de distintos tipos: ya sea de los dirigentes con los lonkos, ya sea acerca de los mecanismos de acción para la recuperación de las tierras, como los denominados hecho violentos, quema de fundos, camiones, etc. Hay, pues, distintas posiciones en cuanto a las formas de solucionar conflictos, pero todos tienen un solo objetivo final: la defensa de los derechos humanos, la recuperación de sus tierras y el respeto que se les debe como Pueblo.

V. CRISIS ECOLÓGICA MUNDIAL – REPERCUSIONES Y PERSPECTIVAS PARA CHILE

Parece estar fuera de discusión el que el Mundo se acerca o atraviesa una crisis de orden ecológico junto con una crisis que podríamos denominar energética.

En el último medio año, pero sobre todo en los últimos meses, se han venido sucediendo una serie e hechos de gran relevancia para los temas de la Ecología y la Energía, tanto a nivel internacional como a nivel nacional.

En la Ecología, es la problemática del Cambio Climático lo que ha acaparado la atención y la preocupación de todo tipo de gente: ya sea porque la cumbre recién realizada en Nairobi (Kenya), continuación de la de Kyoto y Montreal, entregó un pronóstico bastante alarmante sobre las perspectivas que este fenómeno ofrece a la población mundial de mantenerse los actuales niveles de consumo y vida; como porque casi simultáneamente se hizo público en Gran Bretaña el informe que sobre esta materia elaboró –a petición del gobierno- un comité de expertos encabezado por un connotado economista (Nicholas Stern), tras el trabajo de un año. Este informe, de 700 páginas, conocido desde entonces como “Informe Stern”, echa por tierra toda duda que podría concebirse acerca de la inexistencia o falta de base científica del fenómeno del calentamiento global, y muestra en forma sobria y dramática el oscuro destino que espera a diversas regiones del planeta, de no actuarse ahora mismo. El Informe sostiene que el costo de la inacción será equivalente a perder el 5% del producto mundial al año, y que puede crear millones de refugiados porque sus ciudades y hogares pueden resultar dañados por sequías o inundaciones. Por otro lado, pueden verse afectados el acceso al agua potable, la producción de alimentos, la sanidad y el medio ambiente, al tiempo que millones de personas sufrirán hambrunas.

Tanto el Primer Ministro británico como el Secretario General de la ONU usaron –para referirse al tema- un vocabulario que hasta hace poco parecía reservado a los más furiosos “ecologistas”, y no ocultaron que de no actuarse ahora, las consecuencias serían catastróficas.

Sin embargo, la solución de este grave problema está lejos de ser sencilla. Entre otras muchas dificultades, nos encontramos con las siguientes:

1. Los principales países contaminantes (y por tanto, contribuyentes al cambio climático global) son los países capitalistas altamente desarrollados, que en general muestran poco interés concreto en reducir drásticamente sus emisiones (incluso el más contaminante de todos –EE.UU.- ni siquiera ha ratificado el protocolo de Kyoto y no se atiene a las reglas de éste, cosa que sí pretende hacer prácticamente todo el resto del mundo). A este factor es preciso agregar que –según las previsiones científicas- los principales perjudicados con el cambio climático serán en un principio (en realidad, se puede afirmar que ya lo son, si se consideran las catástrofes meteorológicas que se han repetido los últimos años en Asia, Centroamérica y otras zonas pobres) los países más pobres de Asia, África y América Latina. Sin embargo, son justamente estos países los que menos pueden influir sobre el curso del fenómeno, ya sea por su bajísimo nivel de emisión, como por sus reducidos medios de defensa y combate frente a los desastres que experimentarán.
2. La reducción misma de las emisiones es muy difícil, a menos que: a) se cambien radicalmente las fuentes energéticas (abandonando los combustibles fósiles), pero a todas luces no hay tiempo ni condiciones materiales para ello; ó b) se reduzca radicalmente el consumo de energía en todo el mundo, pero en especial en los países desarrollados. Esto último implicaría una política voluntaria y declarada de decrecimiento económico, que ningún político estará dispuesto a impulsar, y que incluso tropezaría con una fuerte resistencia dentro de las mismas poblaciones.

Así y todo, la fuerza de los hechos hará que los distintos “responsables” y los pueblos en una segunda etapa tomen conciencia y comiencen a aceptar que el futuro no podrá seguir siendo el baile de derroche al que estamos acostumbrados hoy día. Pero será un proceso lento y difícil y de incierto resultado final.

Ahora bien, Chile no está al margen el problema del Cambio Climático. De hecho, el Estado chileno participó de Kyoto y de los distintos acuerdos y protocolos internacionales sobre el tema. Incluso se ha dotado de una organización mínima al interior de la CONAMA (con participación de representantes de distintas instituciones del país) que no sólo ha entregado informes parciales a la ONU cumpliendo con sus compromisos en esta materia, sino que ha elaborado recientemente una “Estrategia Nacional de Cambio Climático”, con tres Ejes temáticos:

1. Adaptación a los Impactos del Cambio Climático
2. Mitigación de las emisiones e Gases de Efecto Invernadero
3. Creación y Fomento de Capacidades Técnico-científicas de Cambio Climático

La relevancia del problema para Chile queda bien expuesta en el siguiente párrafo del citado documento: *“Chile posee zonas costeras bajas; zonas áridas y semiáridas; áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la desertificación; áreas urbanas altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles. Por ello, gran parte de las consecuencias previstas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU podrían ocurrir o estar ya sucediendo en el país”*.

En lo que respecta a la Energía, la situación no es mucho mejor, aunque bastante más controvertida. Sabemos por supuesto que las fuentes de los principales combustibles (petróleo y gas natural) se hallan desigualmente repartidas por el planeta y son objeto de permanentes negociaciones, pactos, disputas y guerras. Sabemos también que sectores crecientes de especialistas

auguran para pronto una disminución paulatina en la disponibilidad de estos dos recursos naturales (el llamado *peak* del petróleo). Esta posición –que en los medios oficiales y gobernantes gozaba de poca estimación- está también comenzando a abrirse paso. Es así como el organismo especializado más importante de los países capitalistas desarrollados (la Agencia Internacional de la Energía, AIE) advirtió en un muy reciente Informe Anual que “*el futuro que enfrentamos hoy es de una energía, sucia, insegura y cara*”, prevé un aumento en la demanda mundial de energía de 53% para los próximos 25 años, y no visualiza otra solución a este problema que la inversión en plantas nucleares.

Sin embargo, no se requiere de ningún informe para constatar en la práctica cotidiana la importancia que está adquiriendo este factor en nuestras vidas y en la política nacional e internacional. Desde la guerra en Irak y todos sus efectos colaterales, pasando por la cuasi-guerra contra Irán, hasta los forcejeos y amenazas contra Venezuela, y las interminables negociaciones, acuerdos y desencuentros en nuestra propia América del Sur, todo nos recuerda con claridad que el factor energético ha pasado a ocupar un lugar que aparentemente no está dispuesto a ceder.

En Chile, en particular, está en marcha una intensa discusión –reducida eso sí a las esferas de gobierno y de las grandes empresas, y muy coyunturalmente a los políticos de todos los partidos y en grado mínimo a la población- acerca de un “modelo energético” para el futuro. A raíz del campanazo que significara los sucesivos cortes de gas desde Argentina, la preocupación de estos sectores se ha centrado en cómo remplazar esta fuente poco confiable y agotable de energía. Y se han barajado dos alternativas fundamentales: la hidroeléctrica (para la que Chile cuenta con inmejorables condiciones naturales, y que además muestra en fase muy avanzada una serie de proyectos concretos de gran envergadura –especialmente en la provincia de Aysén), y la nuclear (en la que Chile tiene poquísima experiencia y no cuenta con ninguna condición especialmente favorable para su implementación).

Las centrales hidroeléctricas planificadas en Aysén son muy cuestionadas por el efecto negativo de las grandes represas que requieren. Hace unos días, sin embargo, el Ministro de OO.PP. planteó la necesidad imperiosa de que las empresas que pretenden levantar dos grandes centrales en valle del río Baker modifiquen sus proyectos y en vez de planificar la inundación de extensos terrenos, decidan utilizar otro tipo de central “con menor nivel de inundación”. Esto se conseguiría con centrales llamadas “de paso”, que se utilizan con éxito en países como Noruega. Queda por ver si resultan tan eficientes y lucrativas como las convencionales, y si el gobierno y los sectores interesados (incluida la población de la zona) aceptarán de buen grado esta solución al problema.

Las centrales nucleares presentan muy graves desventajas. Resumidamente: a) son altamente peligrosas, porque aunque juren que las técnicas y construcciones modernas tienen una probabilidad de falla de una en mil millones, no hay principio científico alguno que garantice que esa falla no se vaya a producir mañana; a eso habría que agregar que ese *nivel de seguridad* no toma en cuenta las fallas humanas ni los sabotajes voluntarios; b) son de difícil venta al público: si hoy día se produce un inusitado revuelo por centrales hidroeléctricas en Aysén, no quiero ni imaginar lo que significaría ofrecerles a los ayseninos cambiarlas por una central nuclear, y se puede asegurar sin riesgo de equivocarse que ninguno de los proponentes de una central nuclear van a vivir en las cercanías de ésta; c) son tremendamente caras, y no tienen ninguna posibilidad de instalación sin una fuerte inversión del Estado; este costo sube en la medida que aumentan las dificultades por los puntos a) y b); d) demoran fácilmente 10 años en construirse, requieren materia prima para operar que no se encuentra en cualquier lugar ni en abundancia, y que tenderá a acabarse y encarecerse en la misma medida que todo el mundo se decida a construir dicho tipo de plantas, como pretenden los sectores interesados en EEUU, Europa, China, América Latina, etc. e) por último, tampoco resuelven el problema del agotamiento del petróleo en lo que respecta al transporte (terrestre, marítimo, aéreo).

Es claro que la ecuación energética no es de fácil solución, ni para el mundo ni para Chile en particular. Al igual que con la crisis ecológica, en este caso se cruzan factores “filosóficos” (qué tipo de vida necesitamos o queremos llevar), económicos (cuánto queremos crecer, si es que), financieros (de dónde sacar la plata para las enormes inversiones a considerar), políticos (quién y desde dónde provee las materias primas, los equipos, los técnicos), ambientales (cómo se afecta el medio ambiente y el hábitat humano, qué destino tendrán los desechos), de propiedad (quién hace las inversiones, quién controla la operación, quién se embolsa las ganancias, si las hay), y por supuesto técnicos.

Y en el caso de la Energía, se pueden aplicar perfectamente gran parte de los dos factores desfavorables que mencionamos en el apartado de la Ecología.

En noviembre tuvo también lugar la presentación del informe bi-anual de la prestigiosa organización WWF Internacional sobre el estado de los ecosistemas del planeta. Este informe (“Planeta Vivo 2006”) es el resultado de dos años de estudio sobre datos de 2003. Sus resultados reafirman las conclusiones de los informes anteriores: desde finales de los años `80 los pueblos de la Tierra han estado utilizando anualmente más recursos del planeta de los que éste podía regenerar en cada año. El informe en cuestión resume sus resultados a través de dos indicadores: el “índice del planeta vivo” que pretende medir la evolución de la biodiversidad del planeta a través del estudio de 1313 especies de vertebrados en todo el mundo. Consta que entre 1970 y 2003 la población de vertebrados se ha reducido en un tercio. El otro indicador es la “Huella Ecológica”, que mide las necesidades de tierra y agua biológicamente productiva que requieren los humanos para producir en forma sustentable en el tiempo todo lo que consumen y para absorber en forma sustentable todo lo que desechan (ya sea como basura o como contaminación). Los resultados son nuevamente preocupantes: en el mundo hay una capacidad disponible de 1,8 hectáreas por persona, pero producimos-consumimos-desechamos a un ritmo de 2,2 hectáreas por persona. Es decir, estamos gastando más de lo que se renueva naturalmente, y a este ritmo, en el año 2050 estaríamos necesitando el equivalente de dos veces la capacidad biológica del planeta.

De todos estos estudios surge la pregunta ¿nos vamos a enfrentar al colapso de la civilización humana? En este Informe, así como en el Informe Stern y otros ya citados, se afirma que no necesariamente, si es que se invierte desde ahora el rumbo que lleva el planeta, lo que implicaría tomar decisiones políticas desde ya.

En otros sectores, por ahora minoritarios, se sostiene que lisa y llanamente ya no hay tiempo para revertir lo hecho y nos dirigimos al precipicio. Otros sectores intermedios reconocen que aún es tiempo de cambiar la dirección de la marcha, pero que las dificultades para cambiar el curso (decisiones drásticas al más alto nivel político, conciencia y convencimiento en todos los sectores de la necesidad de cambiar de modo de vida, limitar o eliminar el crecimiento “económico”, coordinación a nivel internacional, etc. etc.) son tan significativas, que va a ser prácticamente imposible enmendar el rumbo adecuadamente, y que serán los propios humanos (desde los jefes de Estado hasta el último campesino del lugar más apartado) los que experimentarán en carne propia el choque probablemente violento con la realidad natural, sin la necesaria preparación, y con resultados que oscilarán entre el colapso en diversas esferas de la vida y el “sálvese quien pueda” en que algunos saldrán malparados y otros saldrán a flote con más o menos heridas.

Ahora bien, desde el punto de vista de las organizaciones sociales de base, no cabe otra alternativa ante este difícil panorama que en primer lugar contribuir al conocimiento, difusión y comprensión del problema, para en un segundo momento proponerse la organización por la base de las medidas necesarias y adecuadas para combatirlo, o al menos, contrarrestarlo. Hay toda una serie de medidas que al respecto se pueden proponer e impulsar, pero su examen escapa a los límites de este análisis.

Resumiendo, y poniendo las cosas en perspectiva: creemos poder sostener que a nivel mundial y de Chile en particular estamos mal preparados para enfrentar los retos que la crisis ecológica y la crisis energética nos están presentando. Fundamentalmente, porque el sistema capitalista de libremercado pone las prioridades al revés y no permite que los pueblos visualicen e identifiquen sus genuinos intereses y necesidades, impidiendo la búsqueda y realización de las soluciones adecuadas.

VI. EFERVESCENCIA EN LOS ANDES: ENTRE LA REFUNDACIÓN DEMOCRÁTICA Y EL CONTINUISMO NEOLIBERAL

En los últimos 5 años, los países de la vertiente andina de la América del Sur, se han convertido en la sub-región más convulsionada del continente, sin lugar a dudas. Protagonistas centrales de la efervescencia son los movimientos populares, que alcanzan en estos países diversa configuración y envergadura, pero que en todos ellos han ido adquiriendo mayor fuerza e ingerencia en el desarrollo de los hechos. Desde la resistencia extendida a las políticas neoliberales, los movimientos sociales andinos han ido alcanzando una proyección política nacional cada vez más decisiva y determinante.

Este panorama ha puesto en tensión a las clases dominantes en la sub-región y, a la cabeza de todas ellas, al imperialismo norteamericano. Este último, en particular, advertido del riesgo que la “mancha de aceite bolivariana” se extienda por toda la zona, poniendo en cuestión su hegemonía, ha reordenado sus fuerzas y redefinido su estrategia en cada país y en el conjunto del área, apuntando a desestabilizar los procesos encabezados por los movimientos populares, a dividir a los que aún no consolidan una alternativa política propia y a cooptar, estigmatizar y clientelizar a los que recién parten.

Aislar y derrotar el ejemplo de Venezuela y Bolivia, caricaturizar a sus gobernantes, impedir a toda costa que se produzca una polarización antineoliberal masiva en cada país, poner en crisis los procesos de integración suramericanos, fortalecer la dependencia comercial y financiera de la economía norteamericana, son algunos de los objetivos centrales de las maniobras imperialistas en esta sub-región de América Latina. La disputa ha sido y sigue siendo muy intensa.

La pelea por el carácter de la integración

En el plano sub-regional y de las relaciones internacionales, las iniciativas han dado cuenta de dos perspectivas distintas. Por un lado, las que privilegian la liberalización comercial y financiera, de corte neoliberal; y por otro, las que se proponen un enfoque más integral, de complementación de fuerzas y esfuerzos para un desarrollo que atienda las necesidades económicas y sociales más básicas de los pueblos.

El triunfo electoral reciente en Colombia y Perú de los candidatos respaldados por las fuerzas neoliberales, Álvaro Uribe y Alan García, favoreció la aprobación parlamentaria en esos países de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. Está pendiente, sin embargo, el trámite de su aprobación ahora por el congreso norteamericano; como paso determinante para su entrada en vigor. El contundente resultado adverso al gobierno de Bush de las elecciones que renovaron parcialmente ambas cámaras en noviembre pasado, ha postergado una eventual aprobación de estos TLC cuando menos a junio del 2007. La victoria del partido demócrata podría significar la modificación de estos

TLC, con la inclusión de cláusulas ambientales y laborales e incluso derivar en el rechazo definitivo de ambos TLC, en la medida que se reforzarán las posiciones proteccionistas.

En Ecuador, las marchas y ocupaciones de caminos del movimiento indígena en abril de este año en contra del TLC con los EE.UU. y por la expulsión de la Occidental Petroleum Company terminaron por generar el clima político necesario como para que el vacilante gobierno de Alfredo Palacio tomara la determinación de caducar el contrato de la “Oxy” mientras el parlamento modificaba la ley de hidrocarburos, elevando la tasa impositiva en beneficio del estado. Así las cosas, Washington unilateralmente dio por cerrado el proceso, en mayo del 2006, sin haber llegado a acuerdos definitivos entre los equipos negociadores de ambos países. El triunfo de Rafael Correa en las recientes elecciones presidenciales en Ecuador hace del todo improbable que las negociaciones para un TLC con los EE.UU. puedan restablecerse. Y lo más probable es que queden definitivamente canceladas.

En el plano sub-regional, el resultado de esto fue la fractura en los hechos de la Comunidad Andina de Naciones, al desmontarse las políticas proteccionistas del mercado andino. En estas circunstancias, Venezuela procedió a comunicar su retiro del bloque, al mismo tiempo que su incorporación como miembro pleno del MERCOSUR.

Para cubrir la imagen de su crisis, los miembros de la CAN invitaron entonces a Chile a reintegrarse al pacto, lo que se concretó en estos meses. Lo más significativo que derivó de ello fue la apertura de negociaciones para nuevos TLC, pero esta vez entre Chile y Perú por un lado y Chile y Colombia, por otro; ambos ya concluidos y en punto de ratificación. En definitiva, un afianzamiento de las relaciones comerciales y financieras entre estos países, en el más puro esquema neoliberal.

A partir de ello y por boca del canciller mexicano Luis Derbez, el imperialismo ha esbozado incluso la idea de una “Comunidad del Pacífico”, en torno a un eje “México-Colombia-Chile”, para articular a toda la vertiente andina de los países latinoamericanos y rivalizar con el eje “Venezuela-Brasil-Argentina” que desde el Atlántico, aspira a ser el núcleo unificador de la región suramericana.

La perspectiva contrapuesta, se hizo presente a través del planteamiento por el nuevo mandatario boliviano, Evo Morales, de los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP). Con ello vino a aportar elementos a la llamada Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), marco en el cual Bolivia suscribió a fines de abril importantes acuerdos con Venezuela y Cuba, no sólo en materia comercial, sino que en una amplia gama de temas económicos, sociales, culturales, políticos, militares, tecnológicos, etc. Un espaldarazo trascendente a esta línea estratégica de integración regional y que fortalece a cada uno de los países involucrados, pero en particular al nuevo gobierno boliviano.

En el plano de los movimientos sociales, en estos meses siguieron realizándose esfuerzos de articulación regional de sus fuerzas: indígenas, migrantes, cristianos, campesinos, redes temáticas de ONGs, movimientos autogestionarios, etc., multiplicaron sus encuentros en distintas ciudades suramericanas; tanto en reuniones de carácter sectorial, como en foros multisectoriales –como las Cumbres de los Pueblos o Foros Sociales. En ellos, va cristalizando una conciencia supranacional de la militancia y van surgiendo iniciativas y propuestas cada vez más concretas que apuntan a levantar una perspectiva de desarrollo nacional y regional alternativa a la del capitalismo neoliberal; que interpela abiertamente los acuerdos y procesos intergubernamentales.

Los procesos de refundación democrática (Venezuela, Bolivia y Ecuador)

En los ámbitos nacionales, están en primer lugar, los procesos en que el movimiento popular ha logrado entronizar gobiernos que han emprendido una refundación democrática del estado y

reformas económicas y sociales de vasto alcance, para atender los problemas más agudos de su población y recuperar un grado de soberanía económica en la conducción del país. Son procesos de impronta revolucionaria, aunque no lleguen por el momento –y quizás no llegarán por un largo período- a romper los marcos del capitalismo de estado.

Es el caso de Venezuela, desde hace ya más de 8 años, en que con el liderazgo de Hugo Chávez, el movimiento popular venezolano ha logrado darse una nueva Constitución y emprender importantes transformaciones. En lo económico se trata de ampliar las bases del crecimiento más allá de la riqueza petrolera controlada por el estado, re-industrializar el país, dar espacio al fortalecimiento del sector de cooperativas y de la pequeña producción popular, avanzar hacia la seguridad alimentaria. En lo social, las “misiones” han sido el mecanismo para avanzar en la resolución de problemas de educación, salud, desarrollo comunitario, seguridad social, etc., pasando por encima del burocratismo del aparato público. El impulso de los Consejos Comunales ha marcado un nuevo paso en la dirección de incentivar la participación y fortalecer la construcción de un poder popular.

Con el viento a favor del precio del petróleo, la economía venezolana ha continuado su ciclo expansivo y el apoyo popular de Chávez se ha extendido desde los sectores más pobres hacia segmentos de las capas medias. Todo lo que explica la contundente nueva victoria electoral que prolonga su mandato por 6 años más, que permitirán avanzar en la consolidación del proceso de cambios.

En Bolivia, el gobierno de Evo Morales en corto lapso ha dado tres pasos históricos, decretando la nacionalización de los hidrocarburos, instalando la Asamblea Constituyente y promulgado una nueva ley agraria; hitos que han abierto procesos de confrontación de intereses que serán decisivos en el curso futuro de los acontecimientos.

A partir del 1º de mayo, se ha abierto un proceso de negociación con las transnacionales que operan en el sector de hidrocarburos y también con el gobierno argentino, a fin de recuperar un mayor margen de ingresos para el estado boliviano y asegurar la continuidad de las inversiones necesarias para un más pleno aprovechamiento de sus recursos gasíferos.

Tras la reciente suscripción de contratos de operación con 10 petroleras extranjeras, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se está centrando ahora en obtener el 51% de las empresas mixtas Transredes, Chaco y Andina, así como de las privadas Petrobrás-Refinación y la Compañía Logística de Hidrocarburos.

Con Kirchner se logró primero un acuerdo que aumentó el precio del gas que importan los argentinos en un 56 %, a 5 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica). Más recientemente, se pactó avanzar en la integración energética entre ambos países, aumentando los 7,7 millones de m³/diarios de gas que Bolivia bombea a Argentina hasta 27,7 millones de m³/diarios en 2010, con una fórmula para ajustar en adelante la tarifa y una inversión conjunta (YPFB-ENARSA) para materializar un gasoducto del nordeste argentino.

Con Petrobrás no se ha alcanzado acuerdo en relación a dos refinerías, que adquirió en licitación en 1999, las que desea mantener bajo su control o vender la totalidad de sus acciones. Esta controversia derivó el 15 de septiembre pasado en la dimisión del anterior ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Solís Rada. Con la petrolera brasileña también queda pendiente la negociación para fijar el nuevo precio del gas boliviano exportado a Brasil, que actualmente es de cuatro dólares por millón de BTU.

En cuanto a la Asamblea Constituyente, sus deliberaciones avanzan en medio de la controversia acerca del carácter de la misma, aunque aún no inician el trabajo de elaboración de una nueva Constitución. Mientras el MAS afirma el carácter originario y fundante de la Asamblea, la

oposición intenta limitar su jurisdicción a lo que determinen los poderes actuales del Estado. Un capítulo nuevo de esta misma pugna por el reglamento de debates se ha provocado en torno al quórum necesario para la aprobación de sus resoluciones, en el que el MAS impuso un quórum mixto: de mayoría simple para la aprobación de cada artículo y de dos tercios para el texto final y completo de nueva Constitución; lo que ha desatado una huelga de hambre de los opositores.

La nueva ley agraria, por otra parte, significa un golpe mortal a la oligarquía terrateniente. El 87 % de las tierras está en manos solamente del 7% de propietarios de dotaciones agrícolas. Los campesinos tienen solamente 4 millones de hectáreas, el 13 %. En el oriente boliviano persiste el latifundio, prohibido por la ley, y existen propiedades que no cumplen con una función económica o social, aquella que según las leyes permiten detentar las tierras. Según los anuncios oficiales, se revertirán al Estado más del 10% de las 106.700 millones de hectáreas del país, las mismas que son consideradas "improductivas" por parte del gobierno

La victoria de Rafael Correa en Ecuador abrirá camino a un escenario similar al de Bolivia, con un movimiento popular un poco menos estructurado en lo político, pero con bases sociales que han demostrado una gran fortaleza y capacidad de resistencia organizada en los años anteriores. La victoria se alcanzó gracias a la unidad de los sectores populares, de la izquierda y de los movimientos sociales, a su capacidad de atraer a las capas medias y de entre todos impedir las maniobras de fraude que en Ecuador quisieron reiterarse

El programa de Correa contempla como medidas fundamentales la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la renegociación de los contratos con las transnacionales que operan en el sector de hidrocarburos, al mismo tiempo que no renovar en 2009 el convenio que permite la presencia militar de EEUU en la base de Manta.

Algunos componentes comunes de la maniobra desestabilizadora del imperialismo en estos países son, por un lado, el aliento de proyectos de "autonomías" bajo caudillos locales que amenazan con el separatismo de regiones ricas en recursos (Zulia en Venezuela, Santa Cruz y Tarija en Bolivia, Guayaquil, en Ecuador). Por otro lado, la división y enfrentamiento entre distintos sectores sociales populares a partir del ejercicio en provecho propio de partes del aparato del estado, que revive el proceso de descomposición social precedente al triunfo electoral del movimiento popular (choque entre mineros y cooperativistas en Huanuni, Bolivia, por ejemplo). Y en tercer lugar, la acción corruptora y burocrática de elementos enquistados en las instituciones estatales, a falta de un contingente mayor de funcionarios profesionales comprometidos con la ética que debe acompañar la conformación de una nueva institucionalidad.

Complejos desafíos que los movimientos populares de Venezuela y Bolivia están enfrentando y que deberá enfrentar igualmente el pueblo ecuatoriano, que exigen dar continuidad y profundidad a la movilización, y la ampliación y consolidación de la alianza social y política en cada país, que pueda dar sustento a los proyectos de desarrollo nacional que encaran y a la construcción de nuevos Estados que vayan más allá de la democracia representativa, hacia una verdadera democracia participativa, plurinacional, pluricultural, inclusiva.

Colombia y Perú: La carta de los populismos autoritarios

En Colombia como en Perú, ante movimientos populares bastante menos estructurados tanto en lo social como en lo político, se impusieron en las recientes elecciones presidenciales los candidatos que contaban con el respaldo imperial, Álvaro Uribe y Alan García. Uno con mayor ventaja que el otro, pero ambos enfrentando por primera vez candidaturas surgidas de una incipiente reagrupación política de los movimientos populares y con una oferta programática de gobierno muy similar, a pesar de provenir de fuerzas aparentemente diversas.

Uribe y García encabezan maquinarias políticas corruptas dispuestas a ejercer el clientelismo mezclado con la represión como instrumentos básicos de gobierno. Provistos de un discurso populista y aparentemente respetuoso de las formalidades democráticas, promueven en los hechos un programa ampliamente neoliberal, que refuerza el proceso de financiarización de las economías, da mayores ventajas a la inversión extranjera, profundiza la privatización de los recursos mineros y petroleros y se empeña en la ratificación del TLC por el congreso norteamericano.

Administrando las holguras que dan los altos precios de las materias primas, estos gobiernos las usarán para cooptar y dividir a las fuerzas opositoras, mientras no vacilarán en enfrentar las movilizaciones sociales a punta de represión. Ángulo específico de la militarización que ampara una mayor presencia de los EEUU será la continuación del “combate al narcoterrorismo” que ambos mandatarios suscriben. La prórroga del programa de preferencias arancelarias para las economías andinas (APTDEA) se estaría concediendo por un año más, a cambio justamente de seguir endosando la política de criminalización y erradicación de los cultivos de coca que promueve el gobierno de EEUU.

Los desafíos de los movimientos populares en Colombia y Perú pasan en lo inmediato por consolidar su estructuración social y política; que permita ir más allá de la resistencia, a la capacidad de constituirse en alternativas sólidas de gobierno y de poder.

En Colombia, el Polo Democrático Alternativo permitió alcanzar una votación histórica jamás alcanzada por la izquierda en elecciones presidenciales e instalarse como segunda fuerza política. Pero deberá superar las tendencias a la disgregación que surgen de la amplitud de sensibilidades políticas que se han agrupado en su seno; al tiempo que hacer una eficaz labor de oposición parlamentaria. Por otro lado, los movimientos sociales colombianos, que han venido en proceso de articulación y politización creciente, deberán superar el debilitamiento sistemático que les causa la represión paramilitar amparada por el estado.

En Perú, el bloque PNP-UPP, altamente improvisado en las vísperas de la elección presidencial, se quebró poco después de ellas y está por verse si sirve como base para la conformación de una alternativa política sólida del movimiento popular antineoliberal. El liderazgo de Ollanta Humala se presenta más bien precario y la unidad de los movimientos sociales parece ser un proceso más incipiente y complejo. El papel de los pueblos indígenas, de los productores cocaleros y de los campesinos y pobladores afectados por la minería parece tener la mayor relevancia en ese proceso; todavía muy distante de los sectores sociales de los grandes centros urbanos. Una fragmentación social que se reflejó claramente en las mismas elecciones presidenciales y que se repetiría en las próximas elecciones regionales y municipales.

Las movilizaciones estudiantiles y las demás, de las que se habla en otra parte de este informe, muestran que también en Chile, las clases dominantes están ya topándose con un sujeto popular que empieza a constituirse. América del Sur está en ebullición en todos sus rincones.

Apéndice:

Las Grandes Empresas Transnacionales En la Globalización Neoliberal:

Ya en la década de los 80, el modelo económico neoliberal de libre mercado era parte de la realidad chilena, venía, como mucho de lo que nos rodea y hace parte de nuestra vida de habitantes de países subdesarrollados, algunos, con suerte, economías emergentes, de los países desarrollados, particularmente de la única super o hiperpotencia mundial existente en el planeta en este momento de la historia de la humanidad: Estados Unidos de Norteamérica.

El modelo económico neoliberal fue presentado, impuesto y aceptado por el gobierno de la época, la dictadura militar; luego, fue continuado y profundizado por los sucesivos gobiernos de la Concertación. Se creía era la solución que permitiría, por fin, alcanzar el desarrollo a los países pobres y no desarrollados de América Latina y del resto del mundo. La promesa consistía en que al dejar entrar capitales extranjeros y permitir la instalación de las transnacionales, previo desmantelamiento de la industria nacional, en estos países pobres o en desarrollo, habría más trabajo, mayor producción, más consumo y la pobreza y extrema pobreza desaparecerían como consecuencia lógica de un “chorreo” que nunca se dio. Era el crecimiento económico, la reducción del Estado o Estado Subsidiario; es decir, un Estado pequeño, reducido que sólo se preocupe y ocupe de aquellas tareas y actividades que los privados no están dispuestos a asumir porque simplemente no les conviene a sus intereses económicos, y dejar actuar al libre mercado; esto es, que todas las actividades económicas, en un mundo donde todo se compra y se vende, todas las empresas en sus respectivos rubros comerciales circulen y se encuentren o desencuentren libremente, o sea, sin control ni fiscalización alguna por parte del Estado, la receta mágica que nos permitiría dejar atrás aquella vergonzosa condición de país pobre.

Han pasado más de 20 años y hemos aprendido que en la lógica de la globalización económica neoliberal de libre mercado, las grandes empresas transnacionales se instalan en aquellas naciones que les ofrecen las condiciones que éstas necesitan para poder operar. Se trata de mano de obra barata, leyes laborales flexibles, materias primas al alcance de la mano y gobiernos dispuestos a proveer todas las facilidades necesarias para que estas inversiones se queden en un determinado país y no se vayan a otro. Se entiende, porque al no haber industria nacional no hay trabajo, si las transnacionales deciden que en otros países las condiciones de competitividad son superiores no trepidarán en trasladar su capital a esos países. No es coincidencia que las empresas transnacionales crucen todas las fronteras que sea necesario para operar en países del tercer mundo o subdesarrollados; los gobiernos de turno están disponibles para incumplir sus propias normativas, por ejemplo, medioambientales, situación que no es aceptada en los países desarrollados o centrales.

Es importante recordar que hasta inicios de la década de 1970, era la dimensión económica la que estaba supeditada a la dimensión política; esto es, los intereses y decisiones político sociales eran los que determinaban, principalmente, el curso de la sociedad y entregaban las directrices al ámbito económico, y todo el quehacer económico se entendía como un área al servicio de los intereses y necesidades de los seres humanos que componen la sociedad. En teoría, las transacciones de mercancía daban como resultado un dinero que permitía a la sociedad y obligaba a los gobiernos, a través del Estado, a crear políticas sociales que permitieran la distribución y redistribución de la riqueza creada por todos los habitantes de una nación. En la actualidad y a partir de la imposición del modelo económico neoliberal de libre mercado, la situación se invierte: es el poder económico y no el poder político el que domina y controla toda la vida social. De este modo, es la política y los políticos quienes están al servicio de las grandes transnacionales y de todo el poder empresarial. Los gobiernos, quieranlo o no, están al servicio de los intereses del gran empresariado transnacional, debido a un modelo económico que se implantó bajo el supuesto que permitiría a los países más

pobres lograr derrotar aquella vergonzosa e indigna situación de subdesarrollo e igualar las envidiables condiciones de vida existente, aunque no para todos, en el primer mundo. Aquellos alumnos más destacados y de las mejores familias fueron a Estados Unidos de Norteamérica a realizar sus estudios de post grado, magíster o doctorados, a las mejores universidades de ese país, allá les enseñaron que el secreto para terminar con el subdesarrollo era dejar que el mercado se expresara libremente y sería “la mano invisible” la que permitiría el equilibrio entre la oferta y la demanda. En este mercado se supone que libremente concurren empleado y empleador a negociar y lo más importante, bajo condiciones de total igualdad, es decir, quien no posee capital alguno, según el señor Adam Smith, está en condiciones totalmente igualitarias respecto de un posible empleador que es dueño de todo el capital, para negociar y luego decidir libremente si acepta o rechaza la oferta de este capitalista que necesita un trabajador y este trabajador que necesita un empleo porque de no encontrar un empleo no sabe cómo pagará las cuentas y cómo alimentará a su familia.

Fue así que estos destacados profesionales, con diplomas de excelencia académica, regresaron y, desde la Universidad Católica, principalmente, explicaron a todo aquel que los quisiera escuchar, que dado que este modelo económico estaba dando los mejores resultados en los países desarrollados, lo que nosotros debíamos hacer para equipararnos a ellos en los niveles de desarrollo era copiar el modelo. Y así se hizo: se desmanteló el Estado, se vendieron las empresas que eran de todos los chilenos a empresarios privados y sus precios de venta eran, en la mayoría de los casos, muy inferiores a su precio real; se privatizó la educación, se crearon las AFP, las Isapres y el Estado ya reducido optó por crear políticas sociales focalizadas hacia los sectores más deprivados social y económicamente y aquellos que sobrepasaban el límite exigido para acceder a subvenciones o apoyo directo o indirecto del Estado, sencillamente, quedaban echados a su suerte. Las leyes laborales fueron adaptadas a las necesidades de una sociedad altamente compleja y ya ninguna acción legal era posible contra un empleador que decidiera utilizar servicios profesionales, técnicos, o sin especialización formal de un trabajador sin mediar contrato alguno.

La globalización neoliberal implica la interdependencia cada vez más estrecha de las economías entre los distintos países, implica la circulación total de los capitales y hace que las grandes transnacionales dominen el mundo de la economía, genera una competencia total, una competencia entre el capital y el trabajo y como el capital circula libremente a grandes velocidades, los seres humanos son derrotados porque son menos móviles. En el presente, los mercados financieros en manos de privados, tienen en su poder a muchos países y con ello parte importante del futuro económico del mundo. Por lo mismo, tienen la prerrogativa de imponer sus normas e intereses a los distintos Estados, es la empresa privada la que está por sobre el Estado. Las personas deben vivir en función de las necesidades del mercado y no al revés. La ideología neoliberal representa los intereses del capital internacional y parte importante de sus raíces fue definido bajo los acuerdos de Breton Woods en EE. UU el año 1944, donde se reunieron los aliados occidentales que definieron los principios que garantizarían la reconstrucción de Europa, en el marco del término de la Segunda Guerra Mundial, y la formación de un nuevo orden económico mundial, las instituciones económicas y monetarias que promueven y comandan esta doctrina son el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que financian en todo el planeta a diversos centros de investigación, universidades y fundaciones los que, por razones obvias, difunden y mejoran el modelo para ser aplicado en todo el orbe y tienen un séquito de profesionales e intelectuales a su servicio, con el fin de promover la ideología neoliberal.

El punto principal, como decíamos más arriba, es que la economía prevalece por sobre la política, así se deja actuar al capital libre de todo contenido social, esto es, de toda necesidad y

sensibilidad humana y espiritual, y la competencia y competitividad son su fuerza motriz; el libre intercambio no tiene fronteras y permite el permanente desarrollo del comercio a nivel planetario; la división internacional del trabajo baja el precio de los salarios e impide una organización sindical lo suficientemente fuerte como para generar demandas de los trabajadores que puedan ser inmanejables por el empresariado y los gobiernos. El neoliberalismo económico global exige una moneda fuerte para su estabilización; la desregulación por parte del Estado (no sólo no fiscalizar, sino que definitivamente, no tener normas o reglas que obliguen al estado a cumplir un rol que le era inherente: velar por el cumplimiento de leyes, que ahora son escasas o inexistentes, que obliguen al empresariado y al comercio a respetar la condición humana de cada trabajador y consumidor respectivamente); exige también, las privatizaciones y la liberalización de precios. El Estado subsidiario tiene, dentro de sus deberes, que arbitrar siempre a favor de las ganancias del capital, lo que resulta en detrimento de los intereses económicos de los trabajadores. La globalización neoliberal terminó con el mercado nacional y junto con ello aminoró considerablemente el rol que cumplían los poderes públicos. En relación a este mismo tema, Ignacio Ramonet, Director de la publicación mensual “Le Monde Diplomatique”, en el año 2004 expresó que “los directivos de estas empresas, así como los de los grandes grupos financieros y mediáticos, detentan el poder mundial y, por medio de sus pujantes lobbies (negociaciones), dejan sentir todo su peso sobre las decisiones políticas. Se puede decir que confiscan la democracia en su provecho”, y agrega: “en nuestro planeta la quinta parte más rica (20%) de la población dispone del 80% de los recursos, mientras que la quinta parte más pobre (20%) sólo dispone de menos del 0,5%”, esto significa que podemos decir con toda propiedad, amparados en esta información, que quienes dirigen las grandes empresas transnacionales presionan e influyen directamente en los políticos para que legislen en su favor y en los gobiernos para que se encarguen de la perfecta aplicación de dichas leyes, y podemos, además, creerle al señor Koffi Annan, Secretario General (saliente) de la ONU, cuando dijo, en el que será uno de sus últimos discursos oficiales, que en el mundo, los últimos 10 años, los ricos eran mucho más ricos y los pobres mucho más pobres.

Taller de Análisis de Coyuntura Económica y Política, TACEP:

Informaciones en www.cctt.cl y cctt@cctt.cl. En el TACEP participan personas y militantes de diferentes organizaciones interesados en poner a disposición de los trabajadores y sectores populares una visión crítica de la realidad nacional e internacional. Si deseas incorporarte a los grupos de trabajo escríbenos; si deseas colaborar en difundir los Informes Trimestrales, reproducélos parcial o totalmente indicando la fuente. Si no desea continuar recibiendo el **Informe Trimestral**, envíenos un e-mail a la dirección indicada solicitando la baja del mail-list.